

**ASESORÍA EXTERNA**  
**AGOSTO 2023**

**ASESORÍA LEGISLATIVA A SENADOR FELIPE KAST SOMMERHOFF**  
**INFORMANTE: JOSÉ MANUEL ASTORGA LANAS**

**AGOSTO 2023**

# **I. PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY EN MATERIA DE TRASLADOS DE LOS CONDENADOS A PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD**

## **FUNDAMENTOS**

1. Actualmente, nuestra legislación nacional —a través de diversos cuerpos legales— procura regular las garantías y procedimientos básicos de la ejecución de las penas privativas de libertad. Así, tenemos el Código Penal<sup>1</sup>, el Código Orgánico de Tribunales<sup>2</sup>, el Código Procesal Penal<sup>3</sup>, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile<sup>4</sup> y el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios<sup>5</sup>
2. Sin embargo, en los últimos años se han registrado diferentes casos en los cuales se evidencia falta de claridad en lo concerniente a las diferentes competencias de los organismos encargados de operar el sistema de ejecución de penas, específicamente en los aspectos relacionados a los traslados de reos a otros recintos penales.
3. Como consecuencia de lo anterior, la Corte Suprema ha tenido que resolver estas diferencias por medio de diferentes fallos. Por ejemplo, tenemos la sentencia bajo el Rol N° 19.567-2022, la cual revoca lo resuelto por la Corte

---

<sup>1</sup> Artículo 86.- Los condenados a penas privativas de libertad cumplirán sus condenas en la clase de establecimientos carcelarios que corresponda en conformidad al reglamento respectivo.

<sup>2</sup> Sobre las actuaciones de los jueces de garantía, artículo 14, letra f): «Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal.».

<sup>3</sup> Artículo 466, inciso segundo: «El condenado o el curador, en su caso, podrán ejercer durante la ejecución de la pena o medida de seguridad todos los derechos y facultades que la normativa penal y penitenciaria le otorgare.».

<sup>4</sup> Artículo 6, número 12: «Determinar los establecimientos en que los condenados cumplirán sus penas y disponer los traslados de ellos de acuerdo con la reglamentación vigente.».

<sup>5</sup> Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N° 518 de 21 de agosto de 1998, artículo 28, inciso primero: «Por Resolución fundada del Director Nacional, quien podrá delegar esta facultad en los Directores Regionales, serán ingresados o trasladados a departamentos, módulos, pabellones o establecimientos especiales, los penados cuya situación haga necesaria la adopción de medidas dirigidas a garantizar la vida e integridad física o psíquica de las personas y el orden y seguridad del recinto.» Y su inciso final agrega que: «La Resolución que ordene alguna de estas medidas, deberá estar precedida de un informe técnico que las recomiende.».

de La Serena en relación con un recurso de amparo interpuesto en contra de Gendarmería de Chile por el traslado de un interno desde el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio hasta el Complejo Penitenciario de la Serena.

Es decir, mientras la Corte de La Serena resolvió (Rol N° 167-2022) que: «la atribución de determinar el complejo penitenciario dentro del cual el amparado cumplirá su condena es una facultad que recae exclusivamente en la autoridad penitenciaria, y por otra, que en los diversos actos administrativos que preceden al traslado del recurrente se han consignado expresamente los motivos por los cuales se dictaminó el mismo, por lo que malamente se podría reprochar ilegalidad o arbitrariedad a la recurrida, circunstancia que abona al rechazo del presente arbitrio, por lo que solo cabe desestimar el mismo». En paralelo, la Corte Suprema revoca lo anterior señalando que: «(...) la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento».

Sin embargo, la misma Corte Suprema, bajo el Rol N° 20.607-2022 confirmó la sentencia dictada por la Corte de Arica, precisado en el Rol N° 204-2022, en la cual esta última resuelve desestimar el recurso de amparo interpuesto en contra de Gendarmería de Chile correspondiente a un traslado injustificado desde la cárcel de Arica a Santiago (Puente Alto), debido a que: « (...) en la especie, de los antecedentes acompañados por Gendarmería de Chile se advierte que el traslado del amparado obedece a una decisión soberana de Gendarmería con la finalidad de mantener y resguardar la seguridad de los demás privados de libertad, del propio recurrente y de sus funcionarios, la que se enmarca dentro de las atribuciones que le competen, razón por la cual dicho

acto carece de una ilicitud que permitiera ser corregida por vía de la acción de amparo, por lo cual deberá ser desestimada».

4. Estos fallos disímiles se repiten a menudo, y esto obedece a un vacío normativo que no ha definido claramente qué ocurre después de la sentencia condenatoria, cómo los agentes intervinientes del proceso penal deben operar terminado el juicio y, por tanto, cuáles son los derechos y deberes exigibles de las personas privadas de libertad. En rigor, pareciera que existe un ámbito no regulado y, al mismo tiempo, una contravención o inobservancia de la legislación vigente.
5. Así, los diferentes organismos del Estado en la materia se someten a lo que expresa el Código Orgánico de Tribunales, otros a lo que señala la Ley Orgánica de Gendarmería y su Reglamento, y otros a lo que formula el Código Procesal Penal.
6. Asimismo, esta desarmonía se expresa claramente cuando vemos que un juez decide el traslado de un reo de determinada unidad penal sin consultar a Gendarmería o, incluso más, con la oposición de este último, lo cual es una inobservancia a la facultad legal que dispone Gendarmería en el ámbito de la administración penitenciaria y, por cierto, sobre su competencia con respecto a las decisiones sobre el establecimiento carcelario en el cual la persona estará privada de libertad o los eventuales traslados.
7. Por todo lo anterior, estimamos que es necesario precisar las facultades y disposiciones normativas, tanto para brindar protección y garantías a los reos como para dilucidar las competencias exclusivas de Gendarmería de Chile, jueces y demás intervinientes. En otras palabras, esta propuesta procura delimitar el marco de acción de cada actor del proceso penal con el propósito de que ninguno de ellos se apropie erróneamente de preceptos por ausencia de arreglos normativos.

En virtud de los fundamentos presentados, se somete a consideración del Congreso Nacional el siguiente proyecto de ley:

## **PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY**

**Artículo único.-** Modifíquese el Código Orgánico de Tribunales del siguiente modo:

- 1) Agrégase, en el artículo 14, letra f), después del punto y aparte, la siguiente expresión:

«En cualquier caso, los conflictos de derecho relacionados a la determinación de los establecimientos en donde los condenados cumplirán sus penas y la realización de sus eventuales traslados, se resolverán conforme a la atribución señalada en el artículo 6, número 12, del *decreto* ley N° 2.859, de 1979, que fija la *Ley Orgánica de Gendarmería de Chile*.».